

REVISTA DE DERECHO

AÑO XX OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1952 N.º 82

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

COMITE DIRECTIVO

ROLANDO MERINO REYES
ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA
JUAN BIANCHI BIANCHI
VICTOR VILLAVICENCIO G.
QUINTILIANO MONSALVE JARA
MARIO CERDA MEDINA



ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA — CONCEPCION (CHILE)

VÍCTOR VILLAVICENCIO G.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

(Continuación)

53.—A los hijos ilegítimos, según el Título XIV del Libro I del Código Civil.—El estudio del derecho de alimentos de los hijos ilegítimos, considerado como asignación forzosa, reviste especial importancia en virtud de que, en nuestro Derecho, esta clase de hijos no está comprendida entre los herederos ab-intestato del padre o madre, y, en consecuencia, salvo el caso de una asignación testamentaria en la parte de libre disposición, el hijo ilegítimo sólo puede participar en los bienes de su padre difunto por medio del derecho de alimentos.

El problema de los hijos ilegítimos, o mejor dicho, de la investigación de la paternidad ilegítima, ha atravesado en nuestro Derecho por tres etapas bien definidas, a saber:

54.—Primera etapa: comprendida entre la promulgación del Código Civil y el 2 de Diciembre de 1935, en que entró en vigencia la Ley N.º 5.750 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

En este primer período se prohíbe en forma terminante la investigación de la paternidad extramatrimonial. El primitivo artículo 280 disponía que "el hijo ilegítimo que no ha sido reconocido voluntariamente con las formalidades legales **no podrá pedir que su padre o madre le reconozca**, sino con el solo objeto de exigir alimentos". Por su parte, el artículo 282 concedía derecho al hijo ilegítimo para que el supuesto padre fuera citado ante el Juez a

declarar bajo juramento si creía serlo efectivamente, debiendo indicarse en la citación el objeto de ella. Si el demandado no comparecía a dos citaciones consecutivas, pudiendo hacerlo —requisito este último que abría la puerta a toda clase de excusas y justificaciones posteriores—, se miraba como reconocida la paternidad. Si, por la inversa, el padre comparecía y negaba la paternidad, el artículo 284 establecía perentoriamente: "No es admisible la indagación o presunción de paternidad por otros medios que los expresados en los dos artículos precedentes".

En rigor, el Código Civil prohibía en absoluto la investigación de la paternidad ilegítima y sólo permitía al hijo intentar judicialmente un reconocimiento voluntario.

55.—Segunda etapa: que abarca desde el 2 de Diciembre de 1935, fecha de promulgación de la Ley N.º 5.750, hasta el 2 de Junio del presente año (1952), fecha en que entró en vigencia la Ley N.º 10.271 tantas veces citada.

En este período, el nuevo artículo 280 del Código Civil concedió al hijo ilegítimo la posibilidad de acreditar la paternidad, aún contra la voluntad del supuesto padre, en algunos casos en que había reconocimiento expreso, tácito o presunto, para el solo efecto de reclamar alimentos.

Tales casos eran los siguientes:

1.º—Si el padre o madre le habían reconocido en instrumento auténtico como hijo simplemente ilegítimo o con el solo objeto de darle alimentos, o si le habían reconocido como hijo natural y el reconocimiento había resultado ineficaz en ese sentido;

2.º—Si el padre o la madre, personalmente o por medio de un mandatario especial constituido por escritura pública, habían hecho consignar en la inscripción de nacimiento del hijo su respectivo nombre;

3.º—Si el supuesto padre había confesado la paternidad en forma inequívoca, por medio de documentos o de cualquier otro principio de prueba por escrito, emanados fehacientemente de él; o si la maternidad había sido establecida por medio de testimo-

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

609

nios fidedignos que acreditaban el hecho del parto y la identidad del hijo:

4.º—Si mediante un principio de prueba por escrito se había acreditado que el supuesto padre o madre había proveído o contribuido al mantenimiento y educación del hijo en calidad de tal:

5.º—Si el supuesto padre, citado a la presencia judicial, había confesado bajo juramento la paternidad, o si, citado por dos veces expresándose el objeto, no había comparecido sin causa justificada. Este medio de reconocimiento equivalía al establecido en los primitivos artículos 282 y 283; y

6.º—Si durante el período en que, según la presunción del artículo 76, habría tenido lugar la concepción, la madre había sido víctima de violación, rapto o estupro, en cuyo caso la ley presumía como padre al autor del delito.

Fuera de los casos mencionados, el artículo 284 no admitía la indagación o presunción de paternidad por otros medios.

56.—**Tercera etapa:** que se inició con la promulgación de la Ley N.º 10.271.

Ya hemos dicho que la citada ley extrajo del artículo 280, para incorporarlos en el artículo 271 como fuentes de la calidad de hijo natural, todos aquellos casos en que el supuesto padre o madre había reconocido por escrito la paternidad.

Así, por ejemplo, los casos de los números 1.º y 2.º del antiguo artículo 280, en que el reconocimiento se había hecho en instrumento público o en la inscripción de nacimiento en el Registro Civil, dieron lugar al actual número 1.º del artículo 271. El caso del artículo 280 N.º 3.º antiguo, en que el padre o la madre había confesado en forma manifiesta su calidad de tal en un instrumento público o privado, dió lugar al actual número 2.º del artículo 271; lo mismo que el caso de establecerse por testimonios fidedignos el hecho del parto y la identidad del hijo, generó el número 4.º del citado artículo 271. Finalmente, el caso de la primera parte del número 5.º del antiguo artículo 280, en que el padre citado a la presencia judicial había confesado expresamente la paternidad

ante el Tribunal, dió lugar al caso del número 5.º del artículo 271. Es decir, en este punto la reforma de la Ley N.º 10.271 consistió en dar el valor de reconocimiento de hijo natural, con todas sus importantes consecuencias jurídicas, a situaciones que en el texto anterior sólo concedían derecho de alimentos como hijo ilegítimo al beneficiado.

Dentro de esta tercera etapa, el hijo ilegítimo que no tenga la calidad de natural, podrá reclamar alimentos en los siguientes casos:

1) Si de un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos, resultare establecida de un modo irrefragable la paternidad o maternidad del supuesto padre o madre.

Cabe discutir en este caso si la sola prueba testimonial es suficiente, o si, por el contrario, ella debe necesariamente completarse con otros medios de convicción. Hay quienes se inclinan por la primera opinión, basados en que la amplia admisibilidad de la prueba de testigos constituye la regla general y su exclusión o limitación son excepcionales en nuestro Derecho (46). Sin embargo, basados en la redacción gramatical del precepto, estimamos que la conclusión acertada es la segunda y que la sola prueba de testigos, tan deleznable y fácil de producir, no es suficiente para acreditar la paternidad o maternidad en forma irrefragable, y que ella debe necesariamente completarse con otras pruebas o, como dice la ley, con otros "antecedentes y circunstancias". En efecto, es significativo que el legislador, luego de unir con la conjunción copulativa "y" las expresiones "testimonios y antecedentes", haya separado con la conjunción disyuntiva "o" las palabras "antecedentes o circunstancias". Esta redacción, hasta cierto punto forzada, sólo se justifica por el deseo del legislador de dejar en claro que los "testimonios" deben concurrir copulativamente con antecedentes o con circunstancias. De lo contrario, habría dicho simplemente: "si de un conjunto de testimonios, antecedentes o circunstancias", empleando una coma en lugar de la conjunción copulativa "y" a que hemos hecho referencia.

(46) ASSAEL MORIS. Obra citada, página 123.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

011

2) Si el presunto padre o madre hubiere proveído o contribuído al mantenimiento y educación del hijo, en calidad de tal, y ello se prueba en la forma señalada en el número anterior.

En cuanto a la procedencia de la prueba testimonial por sí sola, nos remitimos a lo dicho anteriormente.

Es interesante hacer presente que si el supuesto padre o madre contribuye al mantenimiento y educación del hijo, en calidad de tal, y al mismo tiempo lo ha tratado y presentado como hijo a sus deudos y amigos, estaríamos en presencia de la posesión notoria del estado civil de hijo natural, que reglamenta el número 3.º del artículo 271 del Código Civil. En otras palabras, mientras esa posesión notoria no haya durado quince años, el hijo puede acogerse al derecho de alimentos como hijo ilegítimo basándose en el número 2.º del artículo 280 que estudiamos, y después de cumplirse los quince años, el hijo puede provocar judicialmente el reconocimiento en calidad de hijo natural. Esta situación es tanto más ventajosa si se tiene presente que, en el primer caso, el procedimiento que se aplica es el relativo al juicio de alimentos, de rápida y fácil tramitación, cuando se trata de menores de 18 años; en cambio, la acción de reconocimiento como hijo natural se somete a las normas del juicio ordinario de lato conocimiento. En la práctica, será recomendable provocar primero el juicio de alimentos, a fin de proporcionar al hijo lo necesario para subsistir y, en seguida, iniciar el juicio encaminado a conferirle el estado civil de hijo natural.

3) Si hallándose comprobada la filiación del hijo respecto de la madre, se acredita en la forma establecida en el número 1.º —testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos— que ella y el presunto padre han vivido en concubinato notorio y durante él ha podido producirse legalmente la concepción.

Este precepto no es nuevo en nuestra legislación, pues la Ley N.º 9.293, de 19 de Febrero de 1949, al modificar la Ley N.º 5.750 sobre Abandono de Familia tantas veces citada, había establecido la responsabilidad solidaria al pago de las pensiones alimenticias de la persona que viviere en concubinato con el padre o madre obligado a proporcionar los alimentos.

Tres son los requisitos que deben concurrir para que se produzca el derecho de alimentos en favor del hijo ilegítimo en el caso en estudio, a saber:

a) Que se halle fehacientemente comprobada la maternidad natural o ilegítima, en cualquiera de las formas establecidas por la ley.

b) Que entre la madre y el presunto padre haya existido concubinato notorio, es decir, una apariencia pública de matrimonio o una unión libre, más o menos permanente, entre un hombre y una mujer, que viven juntos y cumplen los deberes conyugales sin someterse a las solemnidades del matrimonio. No revisten este carácter las simples relaciones sexuales que no van seguidas de una convivencia relativamente durable, ni las uniones esporádicas de un hombre y una mujer, que se reúnen sólo para pasar algunos días juntos.

Naturalmente, el determinar si la unión pseudo-conyugal entre la madre y el presunto padre puede considerarse como un concubinato notorio, será una cuestión de hecho que el tribunal apreciará en cada caso sometido a su conocimiento.

c) Que este concubinato notorio haya tenido lugar dentro del período en que, según la presunción del artículo 76, se ha producido la concepción.

No es necesario, pues la ley no lo exige, que el concubinato haya abarcado totalmente el lapso comprendido entre los ciento ochenta y los trescientos días que precedieron a la medianoche en que comenzó el día del nacimiento. Bastará con que, por ejemplo, durante uno, dos o tres meses comprendidos dentro de dicho lapso, la madre haya hecho vida marital con el supuesto padre, para que se produzca la situación prevista por el número 3.º del artículo 280. En cambio, si el concubinato terminó por la separación de los convivientes más de trescientos días antes del nacimiento, o si sólo tuvo comienzo por la unión de ellos menos de ciento ochenta días antes del nacimiento, la concepción no pudo tener lugar durante el concubinato, por lo menos desde el punto de vista de la presunción de derecho del artículo 76, aun cuando biológicamente pudo ocurrir otra cosa, y en tal situación no rige el número 3.º del artículo 280 que estamos analizando.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

613

Análogas disposiciones a la que estamos estudiando se contienen en los artículos 382 y 383 del Código Mexicano, 241 del Código Civil Uruguayo, 366 del Código Peruano y 340 del Código Francés, que, con pequeñas variantes, reconocen derecho de alimentos al hijo ilegítimo con respecto al que hizo vida marital, con su madre en el período de la concepción.

4) Si el supuesto padre, citado por dos veces a la presencia judicial para que, bajo juramento, reconozca al hijo, y expresándose en la citación el objeto, no compareciere sin causa justificada.

Este caso ya ha sido analizado precedentemente y nos remitimos a lo dicho en su oportunidad sobre el particular.

Hay que recordar que el padre citado puede asumir dos actitudes: o lisa y llanamente reconoce al hijo como suyo, en cuyo caso se produce en favor de éste el reconocimiento de hijo natural que contempla el número 5.º del artículo 271; o bien, deja de concurrir ante el juez sin causa justificada, caso en que su rebeldía sólo genera en favor del hijo un derecho de alimentos necesarios, como simplemente ilegítimo, según se desprende de un estudio comparativo del número 5.º del artículo 271 con este número 4.º del artículo 280.

5) Si el período de la concepción del hijo correspondiere a la fecha de la violación, estupro o rapto de la madre. En este último caso bastará que hubiere sido posible la concepción mientras estuvo la raptada en poder del raptor, es decir, no es menester, como en los casos de violación y estupro, comprobar que hubo cohabitación.

Agrega el inciso 2.º de ese número 5.º del actual artículo 280, que "el hecho de seducir a una menor, haciéndola dejar la casa de la persona a cuyo cuidado esté, es rapto, aunque no se emplee la fuerza".

Hasta aquí, la Ley N.º 10.271 conservó el texto anterior del número 6.º del artículo 280, con la sola modificación de establecer que, en el caso de rapto, no es menester acreditar que hubo relaciones sexuales entre el autor y la víctima, sino solamente que la concepción, según la presunción del artículo 76, fué posible mientras ésta se hallaba en poder del raptor.

Donde la importancia de la reforma aparece con mayor nitidez es en el inciso siguiente, que reglamenta el caso de que el delito de violación hubiere sido cometido por dos o más personas, concediéndose al juez la facultad de determinar cuál es el presunto padre, para condenarlo a proporcionar los alimentos. En caso de resultar imposible dicha determinación, la ley faculta al juez para condenar solidariamente a la alimentación del hijo a todos los coautores de la violación.

57.—Reglas generales aplicables a los casos del artículo 280.
—El legislador ha dado algunas reglas generales, que tienen aplicación en todos los casos del artículo en estudio y que son las siguientes:

En primer término, si el Tribunal rechaza la demanda de alimentos en alguno de estos casos, esta demanda no puede renovarse, sino en el caso del número 4.º, en que el padre puede ser citado por segunda vez a declarar si reconoce al hijo como suyo, y salvo el caso de que la nueva demanda se base en antecedentes que se hayan producido con posterioridad a la sentencia recaída en la primera.

En segundo lugar, ni la sentencia que acoja la acción de alimentos, ni el pago de las pensiones alimenticias que se haga en cumplimiento de dicha sentencia, podrán ser invocados por el hijo para reclamar su estado civil de hijo natural. Recíprocamente, la sentencia que rechaza la acción de alimentos interpuesta como hijo simplemente ilegítimo, impide a este hijo reclamar el estado de hijo natural con arreglo a cualquiera de los números del artículo 271.

Por ejemplo, si la demanda de alimentos prospera en virtud de que el padre, citado con arreglo al número 4.º del artículo 280 dejó de concurrir en dos oportunidades sin causa justificada, este hecho no puede invocarse como reconocimiento presunto de hijo natural. Igualmente, si el padre paga durante cierto tiempo los alimentos a que fué condenado con arreglo a cualquiera de los números del artículo 280, no podría el hijo pretender el reconocimiento de hijo natural so pretexto de que el supuesto padre lo ha alimentado y mantenido en calidad de tal. En el caso inverso, si

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

615

el hijo reclama su calidad de hijo natural por cualquiera de las causales del artículo 271, no puede el padre oponer a la demanda la excepción de cosa juzgada, derivada de una sentencia denegatoria recaída en la demanda de alimentos como hijo ilegítimo. Las razones de esta regla son obvias y no merecen comentario especial.

En tercer lugar, los alimentos que se deben a los hijos ilegítimos son estrictamente necesarios, según claramente dispone el artículo 285 del Código Civil.

Sin embargo, en el caso de violación, estupro o raptó de la madre, la obligación del alimentante se extiende a proporcionar los que competan al rango social de la madre, es decir, con respecto al hijo ilegítimo siguen siendo necesarios, pero con respecto a la madre son alimentos congruos. En este último punto, se trata más bien de una indemnización de perjuicios especial que la ley aplica al autor del delito en beneficio de la víctima.

Al respecto, surge el problema de determinar si la solidaridad que contempla el inciso 3.º del número 5.º del artículo 280 rige sólo los alimentos necesarios del hijo ilegítimo o cubre también los alimentos congruos que se deben a la madre. La solución correcta parece ser la segunda, tanto porque la ley no ha distinguido al establecer la solidaridad, cuanto porque los alimentos congruos que se deben a la madre van unidos y forman una sola obligación con los alimentos necesarios que se deben al hijo. Por otra parte, como se trata en rigor de la responsabilidad de los varios autores de un delito por la indemnización de los perjuicios causados, la solidaridad se impone en atención a lo establecido en la regla general del artículo 2317 del Código Civil, que dice: "Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de los artículos 2323 y 2328". El inciso siguiente agrega: "Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso".

Finalmente, cabe hacer notar que la referencia que hace el último inciso del artículo 280 "a las reglas del Título anterior", es equivocada. En efecto, en este punto la ley se ha remitido al Tí-

tulo XII, que trata de los hijos naturales, y no al Título XIII, que viene a ser el anterior, pues éste se refiere a las "Obligaciones y derechos entre los padres y los hijos naturales".

58.—A la madre ilegítima según el artículo 291, inciso 2.º.— Por regla general, el padre ilegítimo no puede reclamar derecho alguno con respecto al hijo ilegítimo, pero en el caso del artículo 291, el legislador ha hecho una excepción a este principio y ha establecido el privilegio, muy justificado por cierto, de que la madre ilegítima pueda reclamar alimentos en contra de su hijo ilegítimo, siempre y cuando no lo haya abandonado en su infancia.

El precepto se funda en que, según la mentalidad y los prejuicios imperantes en la época en que se redactó el Código Civil, la madre soltera quedaba en la inmensa mayoría de los casos totalmente desamparada, generalmente inhabilitada para contraer matrimonio y constituir un hogar, a menudo expulsada de su familia, e incluso en serias dificultades para ganar con su trabajo los medios de subsistencia.

Este derecho cesa, según se ha dicho, si la madre ha abandonado al hijo en su infancia. Por "abandono" debe entenderse no sólo el haberse separado de él negándole su cuidado, sino también el haberse negado a proporcionarle medios de subsistencia pudiendo dárselos. Por "infancia" debe entenderse no sólo los primeros siete años, a que corresponde la palabra técnica de "infante o niño" que define el artículo 26 del Código Civil, sino en general aquella primera parte de la vida en que el individuo no está en condiciones de bastarse a sí mismo o de trabajar para ganar el sustento. En consecuencia, si el abandono ha tenido lugar, por ejemplo, cuando el hijo tenía nueve años de edad y había dejado de ser infante, creemos que este abandono es suficiente para privar a la madre de su derecho de alimentos.

No es necesario insistir en que los alimentos que se deben en virtud de este número 7.º del artículo 321 son estrictamente necesarios.

59.—A los hermanos legítimos.—El derecho de alimentos forzosos en favor de los hermanos legítimos ha sido sumamente dis-

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

617

cutido en la doctrina, y hay muchas legislaciones que no lo han establecido o lo reconocen sólo en ciertas y determinadas circunstancias.

Cabe hacer presente que en el Proyecto originario de don Andrés Bello no figuraban los hermanos legítimos entre las personas que tenían derecho de alimentos; pero ellos fueron incluidos por la Comisión Revisora.

El legislador no ha determinado si el beneficio en estudio rige solamente para los hermanos de doble conjunción o carnales, o si también es aplicable a los de simple conjunción.

El problema parece resolverse de acuerdo con la última conclusión, en primer término porque la ley no ha distinguido en el artículo 321 N.º 8.º, limitándose a exigir que se trate de hermanos legítimos del alimentante; y, en segundo lugar, porque el artículo 41 los define indistintamente. En otras legislaciones se ha adoptado expresamente esta solución, y así, por ejemplo, el artículo 143 del Código Civil Español concede alimentos tanto a los hermanos consanguíneos como a los uterinos.

Los artículos 141 del Código Civil Italiano y 143 del Código Civil Español, sólo reconocen derecho a alimentos a los hermanos cuando no pueden procurarse sus propios medios de subsistencia, por defecto corporal o intelectual o por otra causa ajena a su voluntad; en cambio, les niegan este derecho cuando su indigencia o estado de necesidad se debe a conducta viciosa, pereza u otra causa imputable.

Por su parte, el artículo 210 del Código Civil Mejicano limita este beneficio a los hermanos menores de 18 años de edad.

En el texto originario del Código Civil, estos alimentos estaban limitados a los estrictamente indispensables para sustentar la vida y eran necesarios, ya que el artículo 324 concedía alimentos congruos únicamente en los tres primeros y los dos últimos casos del artículo 321.

Al dictarse la Ley N.º 7.612, de 21 de Octubre de de 1943, que, como consecuencia de suprimir la muerte civil, eliminó el último caso del artículo 321 relativo al religioso exclaustado, los hermanos vinieron a quedar precisamente entre los dos últimos

casos de dicho precepto y, de este modo, pasaron a gozar de alimentos congruos, por una simple omisión u olvido de los autores de la Ley N.º 7.612.

La Ley N.º 10.271 corrigió esta situación y modificó el artículo 324, estableciendo que se deben alimentos congruos sólo en los cuatro primeros y en el último de los casos del artículo 321, es decir, desde el 2 de Junio de 1952 los alimentos de los hermanos legítimos vuelven a limitarse a lo necesario para sustentar la vida.

60.—Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.—El primer problema que plantea este número 9.º del artículo 321, es el relativo a determinar qué debe entenderse por donación cuantiosa, y sobre el particular se han elaborado dos doctrinas.

Hay quienes consideran que se trata de un concepto absoluto, e invariable fijado en el artículo 1410 del Código Civil, al exigir la insinuación para toda donación que exceda de veinte mil pesos (\$ 20.000.—) y, en consecuencia, sólo tiene derecho de alimentos el donante cuando la donación sobrepasa esa suma.

Otros, en cambio —con mejor criterio a nuestro parecer—, estiman que se trata de un concepto eminentemente relativo, que depende en cada caso del patrimonio del donante y cuya fijación corresponde soberanamente a los jueces de la causa. Según esto, una donación superior a veinte mil pesos puede no ser cuantiosa, habida consideración a la fortuna del donante; de modo que si posteriormente éste cae en indigencia, no podría reclamar alimentos congruos contra el donatario.

Por lo demás, si en la práctica se adoptara el primero de los criterios enunciados, en la gran mayoría de los casos las pensiones alimenticias devengadas durante un corto número de meses excederían con mucho al monto de la donación y, en consecuencia, lejos de significar ésta un enriquecimiento para el donatario, iría a constituir para él una carga o gravamen.

El legislador subordina el derecho de alimentos del donante, a la circunstancia de que los bienes ingresen perfecta e irrevocablemente al patrimonio del donatario y le signifiquen en definitiva un enriquecimiento.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

619

Por esta razón es que niega el derecho de alimentos en caso de rescisión o nulidad relativa de la donación, criterio que también debe aplicarse al caso de nulidad absoluta por existir en ésta la misma razón.

También niega el legislador el derecho de alimentos cuando la donación ha sido revocada, lo que puede hacerse por causa de ingratitud, es decir, por cualquier hecho ofensivo del donatario que le hiciere indigno de suceder al donante, según claramente prescribe el artículo 1428 del Código Civil. Entre las causales de indignidad para suceder, que enumeran los artículos 968, 969, 970 y 972 del Código Civil, figura el hecho de que un consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, en el estado de demencia o destitución del causante, no lo socorrió pudiendo hacerlo. Dicho en otras palabras, la donación cuantiosa puede ser revocada por ingratitud si el donatario, en el estado de demencia o destitución del donante, no lo socorrió pudiendo hacerlo, esto es, se negó a proporcionarle los alimentos que contempla el artículo 321 en su número 9.º.

Si el donatario es consanguíneo del donante dentro del sexto grado inclusive, no hay cuestión de que este último puede a su arbitrio demandar los alimentos que le concede la disposición citada, o bien, revocar la donación, siempre que esto último lo haga dentro de los cuatro años siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de que el donatario le negó socorro o alimentos, según se desprende del artículo 1430. Pasado este plazo, ya no se podría revocar la donación, pero sí demandar alimentos, pues este derecho no prescribe por tiempo.

En el caso de que el donatario no sea consanguíneo del donante dentro del sexto grado inclusive, el hecho de no socorrerlo en el estado de demencia o destitución no constituye causal de indignidad ni de ingratitud y, por consiguiente, a nuestro modo de ver, la donación no podría revocarse y el donante no tendría otra facultad que demandar judicialmente el pago de los alimentos.

A pesar de que el legislador no lo ha contemplado expresamente, creemos que tampoco puede reclamar alimentos el donante, cuando la donación ha quedado sin efecto por el evento de una condición resolutoria. Nos basamos para ello en que la misma ra-

zón que se tuvo en vista para negar este derecho en caso de rescisión o revocación —el no enriquecimiento del donatario o la restitución de lo donado al donante—, concurre en el caso de la condición resolutoria, y como sabemos, donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, según un conocido aforismo jurídico.

61.—Al ex-religioso que por su exclaustación no haya sido restituído en sus bienes que en virtud de su muerte civil pasaron a otras manos.—Bajo la sola vigencia del Código Civil, y hasta el 21 de Octubre de 1943, existió en nuestro Derecho la institución de la muerte civil, definida como "la profesión solemne, ejecutada conforme a las leyes, en instituto monástico reconocido por la Iglesia Católica".

Producida la muerte civil, el religioso se hacía incapaz en lo relativo al derecho de propiedad, y, en cuanto a sus bienes, se producía la apertura de la sucesión y se defería su herencia a las personas que, en caso de muerte real, habrían sido llamadas a sucederle. Si el religioso volvía a la vida civil por la relajación de votos, no podía reclamar derecho alguno sobre los bienes que poseía antes de la profesión religiosa, ni sobre las sucesiones que le hubieren sido deferidas durante ella y que no pudo adquirir por ser incapaz de suceder en virtud de su carácter de muerto civil; pero sí podía reclamar derecho de alimentos congruos contra aquellos a quienes hubiesen pasado los bienes que, sin la profesión religiosa, le habrían pertenecido.

Esta institución en la actualidad sólo tiene un valor histórico, pues la Ley N.º 7.612, de 21 de Octubre de 1943, suprimió la muerte civil en nuestro Derecho, confirió plena capacidad a los religiosos para adquirir por acto entre vivos y para suceder por causa de muerte, y eliminó el número 10.º del artículo 321 del Código Civil.

62.—Al fallido.—Hemos dicho anteriormente que el artículo 56 de la Ley N.º 4.558, sobre Quiebras, concede derecho de alimentos al deudor no comerciante en todo caso, y al deudor comerciante cuando hubiere solicitado la declaración de su quiebra.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

621

Esta obligación se suspende mientras el fallido esté declarado reo, y cesa si es condenado en definitiva por quiebra culpable o fraudulenta o por algunos de los delitos contemplados en el artículo 466 del Código Penal.

El monto de los alimentos debe ser fijado por el Tribunal que conoce de la quiebra, con audiencia del Síndico y de los acreedores, y la solicitud respectiva se notifica a los acreedores por avisos, al Síndico personalmente o por cédula, y se tramita en forma incidental.

63.—Entre adoptante y adoptado. — También hemos dicho en párrafos anteriores, que el artículo 22 de la Ley de Adopción establece expresamente que, para los efectos del derecho de alimentos, el adoptado es considerado como descendiente legítimo y el adoptante como ascendiente legítimo, y ambos se entienden respectivamente incluidos en los números 2.º y 3.º del artículo 321 del Código Civil y, en consecuencia, pueden reclamarse recíprocamente alimentos congruos.

64.—Reglas especiales a que están sujetos los alimentos, después del fallecimiento del causante.—Considerado el derecho de alimentos como una asignación forzosa, que puede ejercitarse aún después del fallecimiento del alimentante, nuestro Código Civil ha dado algunas reglas especiales al respecto.

En primer lugar, el artículo 1169 establecía que "el hijo ilegítimo que fuere reconocido como tal en el testamento, podrá exigir a los herederos aquellos alimentos a que sería obligado el testador si viviese; pero sin acción retroactiva".

La disposición era perfectamente justificada, por cuanto sólo en virtud de ella podía tener alguna eficacia el reconocimiento testamentario de hijo ilegítimo. En efecto, si se tiene en cuenta, por una parte, que el reconocimiento sólo iba a tener valor en virtud del fallecimiento del padre ilegítimo y, por la otra, que el hijo ilegítimo no tiene en nuestra legislación otro derecho que el de alimentos necesarios, la falta de una disposición expresa iba a determinar en la práctica que el reconocimiento testamentario fuera inútil e inoperante. Por esta razón, para disipar las dudas y dando

un argumento poderoso en favor de la transmisibilidad de la obligación alimenticia, don Andrés Bello consagró el derecho del hijo ilegítimo para reclamar contra la sucesión los alimentos necesarios a que habría estado obligado el padre ilegítimo, si hubiera vivido. En el inciso 2.º agregaba: "Lo cual se entiende si el testador no le reconociere formalmente con la intención de conferirle los derechos de hijo natural, o no tuviere efecto su reconocimiento en este sentido"; es decir, sin perjuicio de los derechos hereditarios y de alimentos que podría reclamar, si el reconocimiento era suficiente para darle el estado civil de hijo natural.

En otras palabras, el artículo 1169 contemplaba dos situaciones, a saber: a) Si el reconocimiento confería al hijo la calidad de hijo natural, éste gozaba de la plenitud de los derechos inherentes a dicho carácter, podía reclamar alimentos y participar en la herencia en calidad de legitimario o de heredero ab-intestato, pues ése era el alcance del inciso 2.º del precepto; b) Si el reconocimiento no era eficaz en ese sentido, el hijo quedaba como ilegítimo y podía reclamar alimentos necesarios contra la sucesión en carácter de tal, de acuerdo con el inciso 1.º del mismo precepto.

Interpretando erradamente ese artículo, nuestra jurisprudencia declaró en una ocasión que del inciso 2.º del artículo 1169 se desprende, a contrario sensu, que "si el reconocimiento de hijo natural ha tenido efecto y ha resultado eficaz, el hijo no puede reclamar derecho de alimentos" (47). En otras palabras, un precepto dictado con el propósito de dejar siempre a salvo los derechos del hijo natural, fué interpretado por nuestro más alto Tribunal precisamente en el sentido de despojar al hijo natural de todos sus derechos, de lo que se desprendía el absurdo de que, para el hijo, resultaba más beneficioso que el reconocimiento fuera ineficaz, pues así por lo menos podía reclamar alimentos.

El artículo 1169 en estudio fué derogado por la Ley N.º 10.271, como consecuencia de la reforma introducida en los artículos 271 y 280 del Código Civil, en materia de reconocimiento testamento.

(47) Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo III. Sección Primera, Página 294.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

623

Otra regla especial es la contenida en el artículo 1170 de nuestro Código Civil, en virtud del cual los asignatarios de alimentos no estarán obligados a devolución alguna en razón de las deudas o cargas que gravaren el patrimonio del difunto, en virtud de que el legislador presume que las pensiones alimenticias, por su propia naturaleza y finalidad, se consumen en cuanto se perciben y no es posible exigir su restitución. Por la misma razón, la segunda parte de este artículo permite rebajar los alimentos futuros, cuando "parezcan desproporcionados a la fuerza del patrimonio efectivo". En este punto hay que tener presente que los alimentos forzosos entran a contribución para pagar las legítimas y deudas hereditarias, de acuerdo con el artículo 1363, sólo en último término, y cuando ya han quedado sin efecto todas las demás asignaciones del testamento, incluyendo los legados expresamente exonerados por el testador y los legados de obras pías o de beneficencia pública.

En cuanto al pago de las pensiones alimenticias forzosas, el artículo 1361 establece que él debe hacerse por periodos anticipados, periodos que se presumen mensuales, y en caso de fallecimiento del alimentario, sus herederos no pueden ser obligados a restituir los alimentos percibidos anticipadamente por aquél, aun cuando el fallecimiento tuviere lugar a comienzo o mediados de un periodo determinado. Cuando se trate de pensiones alimenticias que ya se estaban pagando en vida del alimentante, se continuarán pagando en la misma forma por sus herederos, sin perjuicio de lo que disponga sobre el particular la voluntad expresa del testador.

Los legados de alimentos voluntarios se considerarán asignaciones de libre disposición y por tal motivo no nos corresponde tratarlos en este trabajo.

(Continuará)
